

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **LUZ MARY LONDOÑO TABORDA**
Demandada : **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**
Radicado : **05001 31 05 018 2019 00719 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes por hijo, parágrafo 1° de la Ley 860 de 2003 -
Decisión : **Confirma** decisión absolutoria
Sentencia N° : **205**

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Declarar que a la señora Luz Mary Londoño Taborda le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo Juan Pablo Restrepo Londoño, ocurrido el 2 de septiembre de 2018, en aplicación del parágrafo 1° del

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras

artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y en consecuencia, **condenar a Protección S.A. a su reconocimiento**, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre; **pago de intereses moratorios, indexación y Costas procesales.**

Hechos relevantes de la demanda:

Afirmó el apoderado de la parte actora, que la señora Luz Mary Londoño Taborda es madre de Juan Pablo Restrepo Londoño, quien falleció el 2 de septiembre de 2018, momento para el cual tenía una edad inferior a 26 años, se encontraba afiliado a la AFP Protección S.A. y contaba con más de 26 semanas cotizadas en el último año anterior al deceso.

Indicó que la demandante dependía económicamente de su hijo, en vista de lo cual solicitó el 27 de febrero de 2019 el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

RESPUESTA A LA DEMANDA:

La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a través de apoderada judicial², aceptó los hechos de la demanda relativos a la calidad de madre de la demandante respecto del causante Juan Pablo Restrepo Londoño, el fallecimiento de éste y su calidad de afiliado; negó los demás hechos indicando que para la pensión de sobrevivientes pretendida en este proceso, no le es aplicable al causante la norma citada sino para la prestación de invalidez, debiéndose haber dejado 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Se opuso a las pretensiones de la demanda y para

disposiciones...", que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

² Archivo 02 del expediente digital.

su defensa formuló las excepciones que denominó: falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, compensación, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir y absolvió a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. de todas las pretensiones de la demanda. Condenó en costas a cargo de la demandante, fijando como agencias en derecho, la suma de \$100.000,00, en favor de Protección S.A.

Argumentó la a quo en términos generales que en el presente caso el causante **no dejó causado el derecho** a la pensión pretendida **al no cumplir con el requisito de semanas** y que si bien se solicita **conforme lo consagrado en el párrafo 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, ello no procede en vista que esa normatividad regula lo relativo a la pensión de invalidez y no de sobrevivientes**, no pudiéndose hacer una aplicación analógica y absolvió de todas las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN:

El apoderado de la demandante Luz Mary Londoño Taborda formuló recurso de Apelación, remitiendo al salvamento de voto realizado en la Sentencia SL 2538-2021, citando los artículos 8° de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que tratan sobre la aplicación analógica

de la Ley; indicando en términos generales que en este caso se presenta un vacío normativo, como se advierte en el referido salvamento de voto. Cita la Sentencia C-020 de 2015 de la H. Corte Constitucional y varias providencias de tutela referidas en la misma, afirmando que en ella se encuentran razones fundamentales para declarar condicionalmente exequible el parágrafo 1° del artículo 1° la Ley 860 de 2003, en el entendido que debe extenderse ese requisito a la juventud hasta los 26 años, con la finalidad de proteger a esta población, frente a la cual se considera hay un déficit de protección; que lo anterior aplica en este caso, toda vez que el causante tenía 21 años de edad.

Sostiene que tal como se indica en el salvamento de voto, no se afecta la sostenibilidad financiera del sistema, por cuanto para ello se encuentran previstos los seguros previsionales para el cubrimiento de la contingencia en los términos del artículo 77 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo a lo anterior, solicita se dé la aplicación analógica del referido parágrafo al presente caso y se revoque la decisión recurrida y se conceda la pensión al cumplirse además el requisito de dependencia económica de la demandante respecto a su hijo fallecido, conforme lo afirmado por los testigos.

Ninguno de los apoderados de las partes presentó alegatos de conclusión.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**; lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, analizándose si para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida, se puede aplicar el parágrafo 1° del artículo 1° la Ley 860 de 2003.

Encontrando esta Colegiatura procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

No es motivo de discusión en esta Segunda Instancia, al encontrarse aceptado por las partes, que la señora Luz Mary Londoño Taborda es madre del causante Juan Pablo Restrepo Londoño, quien falleció el 2 de septiembre de 2018, momento para el cual se encontraba afiliado a la AFP Protección S.A., sin haber dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes al no haber cotizado el requisito mínimo de densidad de semanas exigido en la Ley 797 de 2003.

Se pretende en este caso que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en lo relativo al requisito de semanas, se aplique del parágrafo 1° del artículo 39 de la 100 de 1993, que fuera modificado por la Ley 860 de 2003, el cual fue declarado condicionalmente exequible por la H. Corte Constitucional mediante la Sentencia C-020 del 21 de enero de

2015, “en el entendido de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda la población joven, conforme a los fundamentos jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de esta sentencia”. Los fundamentos a que se hace referencia, indican lo siguiente:

“60. Ahora bien, que el Estado esté en la obligación de garantizar progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales no puede interpretarse en el sentido de que cuenta con la autorización de privarlos de cualquier efecto inmediato. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la doctrina internacional más autorizada en la materia y la Corte Constitucional coinciden en que –como lo expresó esta última en la sentencia C-671 de 2002- algunas de las obligaciones asociadas a los derechos sociales, económicos y culturales deben cumplirse en períodos breves o de inmediato. Una de estas (sic) obligación de exigibilidad o cumplimiento inmediato es la de no retroceder injustificadamente en los niveles de protección previamente obtenidos. En consecuencia, todo derecho económico, social y cultural lleva implícita una prohibición de retroceso injustificado en el nivel de protección alcanzado. Este principio ha sido aplicado en diversas ocasiones por la Corte en el control de las leyes, y en virtud suya se han declarado contrarias a la Constitución normas por violar el principio de no regresividad en materia de vivienda; de educación; de seguridad social; entre otras. La prohibición de regresividad no vincula sólo al legislador, sino también al juez, quien no puede dejar de observarla en la definición futura, caso a caso, del universo al que aplica el régimen especial previsto en el parágrafo 1, artículo 1, de la Ley 860 de 2003.

61. Por lo cual, **para remediar el déficit de protección, la Corte declarará exequible la norma acusada, con la condición de que se extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la población joven**, definida esta última razonablemente, y en la medida en que sea más favorable al afiliado. En los casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia constitucional no evolucione a la luz del principio de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es decir, **se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad, inclusive.**” (Negritas y subrayas fuera del texto).

Sobre la norma y jurisprudencia constitucional citadas, se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde la Sentencia SL 1889 de 2020, precisando aplica únicamente cuando se trata de pensiones de invalidez y no para la de sobrevivientes, veamos:

“Por último, la sentencia C-020 del 2015, que condicionó la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en la que se reformaron algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en el entendido de que la prestación de invalidez allí contemplada se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda la población joven –la cual puede entonces acceder a la pensión si además de cumplir los restantes requisitos tiene 26

semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez o a su declaratoria--, **aplica únicamente en tratándose de pensiones de invalidez** como acertadamente lo estableció el Tribunal, por manera que **no puede ser sostén de la pretensión pensional de la actora con el simple pretexto de que la norma invocada hubiere previsto el reconocimiento del derecho con la exigencia, entre otras, de contar con 26 semanas de cotización**, pues de verse así fácilmente se llegaría a la conclusión de que siempre procede, pues no hay norma alguna que de manera similar hubiere facilitado el derecho pensional con tan reducido número de semanas de cotización en toda la vida del trabajador.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

La posición anterior fue reiterada en la Sentencia SL 2538 de 2021, en un caso similar al analizado, en la cual indicó que no existe *deficiencia normativa, vacío legislativo o laguna axiomática*, en la normatividad que consagra los requisitos para la causación de la pensión de sobrevivientes, los que se encuentran regulados por el legislador, que le permite establecer las exigencias que deben cumplir los afiliados al sistema pensional, para el reconocimiento de las prestaciones previstas para cada uno de los riesgos de vejez, invalidez y muerte; las cuales difieren en el hecho que las origina y necesidades de protección, bien del núcleo familiar, o del afiliado, por lo que no son equiparables. Así mismo, señaló que no es posible hacer surtir efectos a la norma de pensión de invalidez, por analogía, incluyendo su exequibilidad condicionada, a la pensión de sobrevivientes, por cuanto ello supone la inexistencia de una ley exactamente aplicable al asunto, lo que aquí no ocurre y que se debe tener en cuenta los art. 12 de la Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 860 de 2003, que reformaron los requisitos previstos en los art. 46 y 39 de la Ley 100 de 1993, respectivamente, para la causación de la pensión de sobrevivientes y la de invalidez, en su orden, fueron sometidos a control de constitucionalidad, mediante las Sentencias C-556-2009 y C-428-2009; en concreto la H. Corte indicó:

“...Tal como lo ha precisado de manera reiterada esta Corporación, la norma aplicable para establecer el cumplimiento de los requisitos para

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que regula la respectiva prestación, que se encuentre vigente en la fecha de la muerte, en este caso, el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y, excepcionalmente, cuando el afiliado fallecido no completó los requisitos allí previstos, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se aplica la normatividad inmediatamente anterior, siempre que se cumplan las exigencias y reglas que para ello han sido desarrolladas por la jurisprudencia, lo que se acompasa con el raciocinio jurídico del *ad quem*.

Aquí se advierte que, como lo adujo la oposición, **no existe la aducida deficiencia normativa, vacío legislativo o laguna axiomática, de cara al supuesto fáctico puesto en consideración, en la disposición que prevé los requisitos para la causación de la pensión de sobrevivientes, los que se encuentran regulados por el legislador, dentro de su facultad de configuración legislativa, que le permite establecer las exigencias que deben cumplir los afiliados al sistema pensional, para la causación de las prestaciones previstas para cada uno de los riesgos que aquel ampara, de vejez, invalidez y muerte; contingencias que difieren sustancialmente en el hecho que las origina y las distintas consecuencias y necesidades de protección, bien del núcleo familiar, o del afiliado mismo, por lo que no son equiparables, como lo pretende la recurrente, respecto a la pensión de invalidez y sobrevivencia.**

(...)

Para la Sala no resulta proporcional ni ponderado, menos aún racional, justificado o ajustado a los fines de la seguridad social, el desconocer el derecho a prestaciones que exigen menor número de semanas, como la de invalidez o sobrevivientes, porque el periodo en el que se efectuaron los aportes no coincide con aquel que se encuentra específicamente previsto por la legislación para esas contingencias, pero la densidad de cotizaciones con las que cuenta el afiliado supera la exigida para la pensión de vejez, que requiere mayor número de aportes al sistema pensional.

Pero difiere sustancialmente ese planteamiento del que efectúa la censura en esta oportunidad, puesto que **no es posible extraer regla jurídica con soporte siquiera similar, del parágrafo 1° del art. 1° de la Ley 860 de 2003, en tanto que lo pretendido es la disminución de la exigencia prevista por el legislador, en términos de densidad de cotizaciones, a la consagrada por excepción, en el caso de la pensión de invalidez, para un segmento reducido de destinatarios, los afiliados menores de 20 años de edad, que por efectos de la declaratoria de exequibilidad condicionada mediante la sentencia CC C-020-2015, es aplicable a toda población joven, esto es, hasta los 26 años de edad.**

Y no es posible hacer surtir efectos a la norma de pensión de invalidez, por analogía, como se pretende, incluyendo su exequibilidad condicionada, a esta controversia de pensión de sobrevivientes, por cuanto ello supone la inexistencia de una ley exactamente aplicable al asunto, lo que aquí no ocurre, puesto que la prestación se encuentra regulada en el art. 12 de la Ley 797 de 2003, de manera general, sin restricciones que impidan su aplicación al caso concreto, y, además, por cuanto no es posible la aplicación analógica de disposiciones exceptivas, como es lo previsto en el parágrafo 1° del art. 1° de la Ley 860 de 2003.

(...)

Resulta también relevante advertir que los art. 12 de la Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 860 de 2003, que reformaron los requisitos previstos en los art. 46 y 39 de la Ley 100 de 1993, respectivamente, para la causación de la pensión de sobrevivientes y la de invalidez, en su orden, fueron sometidos a control de constitucionalidad, mediante las sentencias CC C-556-2009 y CC C-428-2009, como consecuencia de lo cual se declaró inexecutable el requisito de fidelidad al sistema, tras ser

considerado regresivo, pero se mantuvo vigente lo relativo a la exigencia de 50 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores a la muerte del afiliado o a la estructuración del estado de invalidez, sin que para la pensión de sobrevivientes se condicionara el cumplimiento de tal requisito a la edad del afiliado, para establecer uno menor, en términos de densidad de cotizaciones.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Lo posición anterior ha sido reiterada en las Sentencias SL 1238 de 2023, SL 4127 de 2022; SL 4788 de 2021 y SL 4094 del mismo año, proferidas por la Sala de Descongestión de la H. Corte.

Se concluye de lo expuesto y precisado por la jurisprudencia, que el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, regula el riesgo de invalidez, por lo que no puede aplicarse al de sobrevivientes, al ser dos prestaciones que difieren en el hecho que las origina y de protección, por lo cual no son equiparables y por tanto no puede aplicación por analogía de la referida norma a la prestación aquí pretendida; acogiéndose por esta Magistratura los argumentos mayoritarios expuestos en la Sentencia SL 2538 de 2021.

Así las cosas, no está llamado a prosperar el recurso de Apelación formulado por el apoderado de la parte demandante.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral confirmará la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación se revisa, incluida la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de la señora Luz Mary Londoño Taborda, al no haber

prosperado el recurso de Apelación, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, esto es, la suma de \$580.000,00, en favor de la AFP Protección S.A.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se conoce; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en Segunda Instancia a cargo de la demandante **LUZ MARY LONDOÑO TABORDA**, fijándose las agencias en derecho la suma de **QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L (\$580.000,00)** en favor de la sociedad **PROTECCIÓN S.A.**; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por EDICTO, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

En permiso
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: LUZ MARY LONDOÑO TABORDA
Demandada	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Radicado	: 05001 31 05 018 2019 00719 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes por hijo, parágrafo 1° de la Ley 860 de 2003 -
Decisión	: Confirma decisión absolutoria
Sentencia N°	: 205

FECHA SENTENCIA: 10 de octubre de 2023

Fijado hoy jueves 12 de octubre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado jueves 12 de octubre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO